Señores

**JUZGADO SEGUNDO (02º) CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA (VALLE)**

[j02ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co).

E. S. D.

**PROCESO:** VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**DEMANDANTES:** VALERIA SALGADO GALLO Y OTRA

**DEMANDADOS:** JUAN PABLO ARAMBURO HERNÁNDEZ Y OTROS

**RADICADO:** 761113103002-**2023-00059-**00

**ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A..**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con NIT 891700037-9, y con dirección de notificaciones judiciales al correo [njudiciales@mapfre.com.co](mailto:njudiciales@mapfre.com.co). De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** promovida por Valentina Salgado Gallo y Cristina María Gallo Parra contra Juan Pablo Aramburo Hernández, Bertha Hernández Hidalgo y Mapfre Seguros Colombia S.A.; en acto seguido me permito **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por Juan Pablo Aramburo Hernández y Bertha Hernández Hidalgo en contra de mi representada; anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

## CAPÍTULO I

## CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**Frente al hecho “PRIMERO”:** NO LE CONSTA a mi prohijada de manera directa lo aquí expuesto por la activa, como quiera que mi representada no presenció lo narrado. Pese a ello se logra evidenciar dentro de los documentos que se adosan al expediente como el Informe Policial de Accidente de Tránsito, que la señora Valeria Salgado se movilizaba en la motocicleta de placa HLB-474, vehículo este al que se le atribuyó la causal No. 138 misma que fue identificada como *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”*, como se observa:



Adicionalmente, se evidencia que en el mismo IPAT, atribuyó las hipótesis 302, 304 y 308, las cuales refieren *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”* respectivamente, encaminadas a describir las condiciones de la vía, circunstancias estas que evidentemente alteran el buen ejercicio de conducción, estableciendo que existe una circunstancia extraña o de fuerza mayor, que evidentemente rómpete el nexo causal, como elemento esencial para establecer la responsabilidad civil que pretende la pasiva.

**Frente al hecho “SEGUNDO”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

* NO ES CIERTO que la hipótesis 138 refiera a *“invadir carril sentido contrario”*, pues de conformidad con la Resolución 11268 del 6 de diciembre del 2012, la hipótesis 138 corresponde a *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”*, causal que se encuentra atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante Valentina Salgado.
* Respecto a la “invasión del carril en sentido contrario”, es pertinente resaltar que esta causal se encuentra en duda, resaltando lo señalado y contenido en el CROQUIS, documento que acompaña el Informe Policial de Accidente de Tránsito, el cual claramente señala que NO hay una claridad en el trayecto de los vehículos, pues se consigna en dicho documente “posible trayectoria vehicular”, como se observa:

***Transcripción parte esencial: Posible trayectoria vehicular.***

Lo anterior, nos lleva a inferir que no hubo claridad, por parte del agente de tránsito, que realizó el informe y/o el croquis, en cual fue verdaderamente la trayectoria vial de los vehículos.

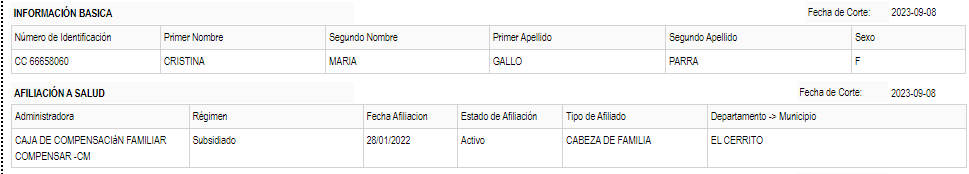
Finalmente, no se puede dejar de lado que el IPAT consiga unas hipótesis atribuidas a las condiciones del estado de la vía, las cuales son 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente. Circunstancia esta, que evidentemente alteran el buen ejercicio de la conducción, existiendo una causal de fuerza mayor o caso fortuito que rompe el nexo causal, como uno de los elementos indispensables para establecer la responsabilidad, que busca la activa a través del presente proceso judicial.

**Frente al hecho “TERCERO”:** No es un hecho propiamente dicho, se trata de una transliteración de lo contenido en el informe médico legal. Pese a ello, es necesario exponer que no existen los elementos suficientes que permitan establecer la pretendida responsabilidad civil en cabeza de la pasiva, como quiera que el IPAT consigna la causal 138 *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”*, atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado. Así mismo, no se puede desconocer que también se consignaron las hipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito. Es evidente, que estas últimas hipótesis alteran el buen ejercicio de la conducción, existiendo una causal de fuerza mayor y/o caso fortuito que rompe el nexo causal, como uno de los elementos indispensables para establecer la responsabilidad civil.

**Frente al hecho “CUARTO”:** NO LE CONSTA a mi representada lo expuesto por la activa en el presente apartado, como quiera que lo expuesto por la activa, refiere circunstancias que desbordan el objeto y funcionamiento de la compañía aseguradora. Pese a ello, es necesario exponer que no se observa en los documentos adosados al proceso, cuál fue el diagnóstico y los tratamientos psicológicos remitidos a la hoy demandante. Que se prueben.

**Frente al hecho “QUINTO”:** Se deja constancia que, siguiendo la numeración del escrito genitor, se evidencia que el presente numeral no fue relacionado en el acápite de los hechos.

**Frente al hecho “SEXTO”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

* NO LE CONSTA a mi representada que, la joven Valentina Salgado para el día 31 de octubre del 2021 se encontraba estudiando, pues dichas circunstancias son de total desconocimiento de la compañía aseguradora. Pese a ello, se evidencia adosado al proceso, una certificación emitida por la Universidad Pontificación Bolivariana, con sede en el municipio de Palmira, donde se observa que dicho documento tiene como fecha de emisión el 18 de octubre del 2020, un recibo y un correo electrónico con fecha de febrero del 2021, por lo cual NO es claro que para la fecha de los hechos objeto del presente asunto, la joven Salgado estuviere estudiando. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.
* Respecto de la afectación económica padecida por las demandantes, es una circunstancia que NO LE CONSTA a mi prohijada, como quiera que la compañía aseguradora es totalmente desconocedora y ajena dicha información. Así mismo, al plenario no se aporta constancia alguna de que el presunto padecimiento económico señalado en el presente acápite se efectuara como consecuencia de los hechos objeto del presente asunto. Pues si bien se observa una presunta constancia donde se expone que al señora Cristina María Gallo, se desempeñaba como auxiliar de servicio varios, dicho documento no contempla los requisitos mínimos de una constancia de trabajo, por cuanto no informa cual era el salario percibido por la hoy demandante, el horario de trabajo, el lugar donde efectuaba dicha laboral, y mucho menos, porque desconoce que los trabajos relacionados al servicio doméstico deben de manera obligatoria afiliados al sistema de seguridad social, circunstancia esta que no pasa en el caso de la señora Cristina Gallo, como quiera que en la búsqueda de la plataforma del RUAF, no se observa información relacionada con la seguridad social, y únicamente se observa afiliación a salud en el régimen subsidiado en salud, lo que permite inferir que la hoy demandante nunca ha tenido una relación laboral, y que para la fecha de los presuntos hechos objeto del proceso judicial, no tenían ningún vínculo laboral que le permitiera tener un ingreso económico.
* Respecto del pronunciamiento efectuado por la señora Valentina Salgado en una única asistencia al psicólogo, no dan cuenta de la verdadera afectación que la misma presenta, pues resulta pertinente reiterar que los documentos adosados al dosier no evidencian el tratamiento psicológico y los diagnósticos efectuados a la hoy demandante, con la finalidad de establecer y mejorar las verdaderas afectaciones psicológicas padecidas. Que se pruebe.

**Frente al hecho “SÉPTIMO”:** NO LE CONSTA a mi representada de manera directa lo manifestado en el presente hecho, por cuanto lo expuesto en el presente apartado, hace parte de la esfera personalísima de cada ser humano. Sin embargo, si bien se encuentra adosado al proceso una historia clínica, en la misma no se puede observar el presunto tratamiento psicológico, diagnósticos y las conclusiones del especialista tratante. Pues resulta pertinente exponer, que el escrito genitor únicamente resalta la consulta efectuada el día 12 de diciembre del 2022 ante psicología forense, sin que se exponga si con posterioridad al presunto accidente de tránsito y/o la valoración por medicina legal, se efectuaron controles y atenciones por especialistas de la salud mental. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “SÉPTIMO”:** Se deja constancia que esta numeración se encuentra repetida. Se sigue la numeración de la demanda.

NO LE CONSTA a mi procurada lo expuesto en el presente apartado, como quiera que la misma es ajena a toda la información que rodea a la hoy demandante. Pese a ello se observa que, al proceso se adjuntó un correo electrónico que da cuenta de lo manifestado.

**Frente al hecho “OCTAVO”:** NO LE CONSTA a mi representada lo expuesto en el presenta apartado, como quiera que no se ha establecido cuales con las circunstancias médicas que actualmente presenta la demandante, pues es necesario exponer que hasta el día de hoy no se aporta PCL, o ultima historia clínica que de cuenta de manera fehaciente lo expuesto en el presente apartado. Que se pruebe.

**Frente al hecho “NOVENO”:** El presente apartado no es un hecho propiamente dicho, sino que configura exposiciones subjetivas realizadas por la activa en busca de su propio beneficio, ya que se evidencia una notable orfandad de medios probatorios que de cuenten de lo expuesto.

Se encuentra necesario reiterar que el IPAT consigna la causal 138 *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”*, atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado. Así mismo, no se puede desconocer que también se consignaron las hipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito. Es evidente, que estas últimas hipótesis alteran el buen ejercicio de la conducción, existiendo una causal de fuerza mayor y/o caso fortuito que rompe el nexo causal, como uno de los elementos indispensables para establecer la responsabilidad civil.

## FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

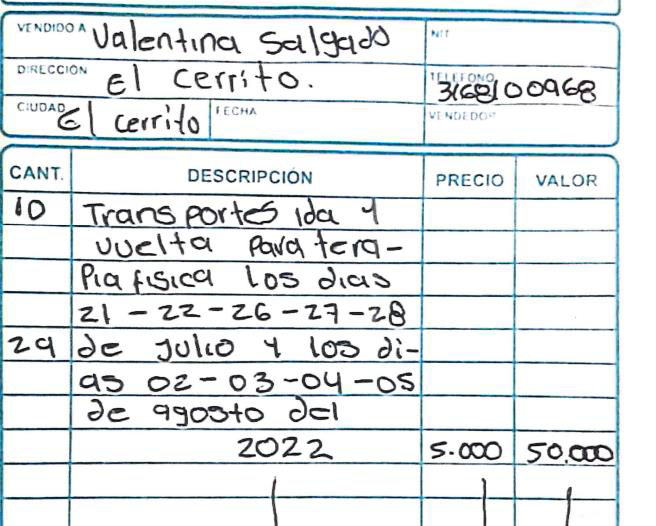
Me a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en la medida en que no se reúnen los supuestos esenciales para que se estructure la Responsabilidad Civil Extracontractual. De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me referiré a cada pretensión de la siguiente manera:

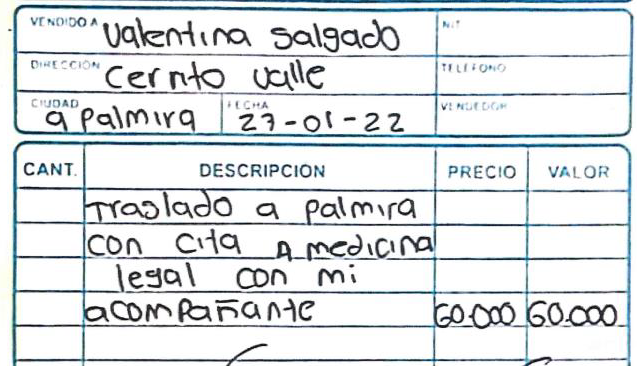
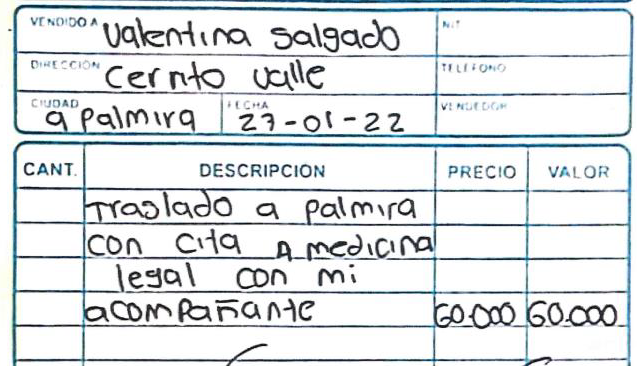
**FRENTE A LA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES:** ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, como quiera que no se haya acreditada la responsabilidad que pretende endilgar la parte demandante al extremo pasivo, debido a que **(i)** el IPAT adosado el presente asunto, consigna la causal 138 atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado; **(ii)** adicionalmente, el mismo informe policial de accidente de tránsito, estableció las hipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito; **(iii)** el croquis del IPAT no es claro y preciso en exponer cual era el sentido vial en el que se movilizaban los vehículos involucrados en el supuesto accidente, como quiera que el mismo señala lo siguiente *“posible trayectoria vial”*, y junto con la posición de los vehículo, es claro que hubo inferencia en las condiciones viales y climáticas que afectan el buen desempeño de la conducción. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que la parte demandante sea responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por la demandante.

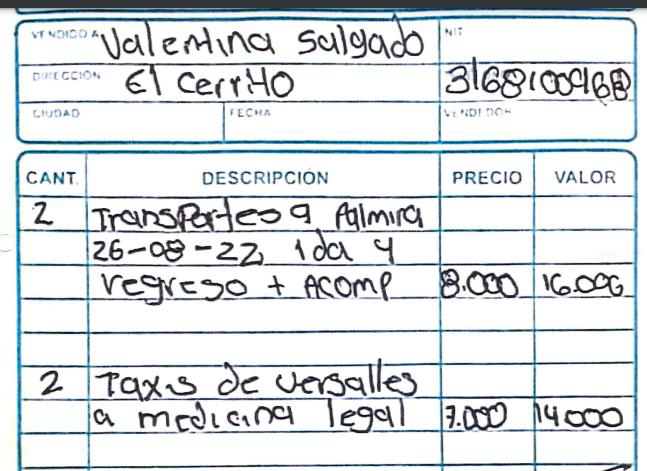
**FRENTE A LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES:** ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, como quiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad.

* **OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO EMERGENTE:** ME OPONGO al reconocimiento del valor pretendido por concepto de daño emergente, el cual equivale a la suma de $2.110.000 m/cte., por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez que la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero. Es preciso exponer que:

**(i)** dentro del plenario probatorio no obre prueba alguna respecto de los presuntos gastos por transporte pagados por la demandante, toda vez que la misma no acredita el valor pretendido, pues se observa únicamente unas cuentas de cobro que no cuentan con los requisitos establecidos para que los mismo sean establecidos como una factura o cuenta de cobro, conforme a los lineamientos del código de comercio. Así mismo es preciso resaltar, que no se especifica las fechas en las cuales se requirió el presunto servicio de transporte, pues las “cuentas de cobro” o “facturas” aportadas por la activa, contienen información que evidentemente solo buscan el beneficio de la parte demandante, como se observa en las siguientes imágenes:

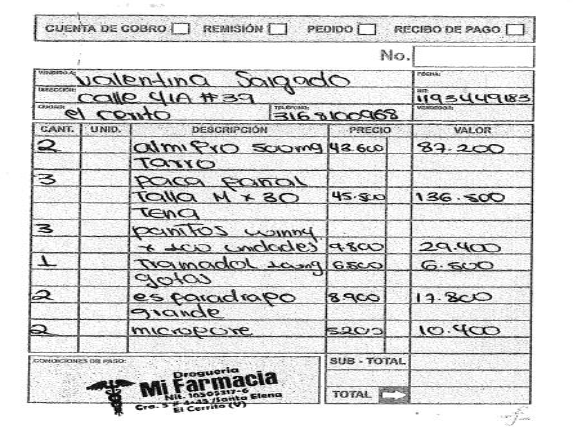




****

De lo anterior, resulta evidente resaltar la inconsistencia en la información contenida en las cuentas de cobro o facturas aportadas, por cuento es evidente que hay valores irrisorios y aún más que no concuerdan entre ello, mismo que se presuntamente se efectuaron bajo el mismo concepto.

**(ii)** Bajo el análisis probatorio se encuentra que la activa adjunta el proceso, un presupuesto por compra de medicamentos, circunstancia esta que no se ha probado fehacientemente, pues como se observa en la historia clínica aportada en la demanda, la joven Valentina Salgado pertenece al sistema subsidiado y los medicamentos recetados fueron entregados por la misma EPS a la cual se encuentra afiliada. Adicionalmente se resalta que las presuntas facturas adosadas al proceso no cuentan con los requisitos establecidos para su valides, y no tiene fecha que indique cuándo se efectuó la posible adquisición de los medicamentos.



**(iii)** En el plenario no reposa prueba del supuesto gasto por alimentación que reclama la activa.

**(iv)** De manera preliminar se indica que en el acápite de pruebas se formulará la ratificación de las cuentas de cobro allegadas por la parte actora, razón por la cual la documentación carece de valor probatorio hasta que se efectúe la debida ratificación.

* **OPOSICIÓN FRENTE AL LUCRO CESANTE:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico, pue se solicita el reconocimiento de $11.716.941 por concepto de lucro cesante. Lo anterior, comoquiera no se haya acreditada la responsabilidad que pretende endilgar el demandante al extremo pasivo, debido a que: **(i)** En IPAT, endilga la causal 138 al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba como pasajera Valentina Salgado; **(ii)** adicionalmente se observa que el mismo Informe Policial de Accidente de Tránsito consigna causales relacionadas con el estado de la vía y el estado del clima en el lugar donde se presentó el supuesto accidente de tránsito, las cuales son 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* circunstancias estas que evidentemente alteran el buen ejercicio de la conducción , **(iii)** No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Cristina Gallo efectivamente tuviera algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio, pues en el sistema RUAF Colombiano no se logra evidenciar información respecto a vinculación al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia que pertenece al régimen en salud subsidiado, lo que da cuenta que no cuenta que no cuenta con una vinculación laboral, que genere algún tipo de ingreso económico.

**FRENTE A LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES:** ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, como quiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad.

* **OPOSICIÓN AL DAÑO MORAL:**ME OPONGO al reconocimiento del valor pretendido por concepto de daño moral, el cual equivale a la suma de $92.800.000 o 80SMLMV, pues dicho valores son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada. Mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad y ni siquiera existe dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) que permita inferir la verdadera gravedad de las presuntas lesiones. Para ilustrar de forma puntual la manera en que la H. Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación algunos casos particulares. Así pues, en sentencia del 6 de mayo de 2016 con radicación No. 2004- 00032-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de una mujer de 17 años, que a raíz de las lesiones derivadas de un accidente de tránsito debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y verse obligada a usar un catéter que le atravesaba su cabeza, cuello y pecho y que le “*(…) restringía la posibilidad de concurrir a sitios controlados por detectores magnéticos, porque estos aparatos descontrolan la válvula; se obstaculiza bañarse en piscinas, realizar actividades deportivas, tener relaciones sentimentales (…)*”[[1]](#footnote-1). En esta ocasión, la Corte reconoció por concepto de daño moral el monto de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000). Por lo que el reconocimiento pretendido por la accionante es exorbitante e injustificado probatoriamente.
* **OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO A LA SALUD:** Es pertinente resaltar que no existe reconocimiento por este tipo de perjuicios, atendiendo que se entienden los mismo tazados y valorados dentro del daño a la vida en relación o derechos constitucionales, lo cual embarga un solo concepto de conformidad a los pronunciamientos realizados por la Corte Suprema, y busca que no se genere una doble indemnización, sin que se distorsione el modelo de reparación integral.
* **OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por concepto de “daño a la vida en relación”, que se tasó por la suma equivalente a $185.600.000 o 160 SMLMV para las demandantes Cristina María Gallo y Valentina Salgado. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios **se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa**, dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido. Por otro lado, este concepto debe basarse en afirmaciones concretas que den muestra de cuáles son las afectaciones reales que ha sufrido las víctimas en sus condiciones de vida.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario destacar que la suma pretendida es abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia, dado que la mentada Corporación en Sentencia SC2107-2018[[2]](#footnote-2), resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a 25 SMLMV, con ocasión a un accidente donde al actor le fue amputada la pierna derecha, es decir, un caso que comporta una gravedad sustancialmente mayor a la discutida en este proceso.

Corolario de lo anterior, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante y por tanto es excesiva y desbordada.

**FRENTE A LAS PRETENSIONES CONDENATORIAS**

**Frente a la pretensión “PRIMERA”: ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, como quiera que no se haya acreditada la responsabilidad que pretende endilgar la parte demandante al extremo pasivo, debido a que **(i)** el IPAT adosado el presente asunto, consigna la causal 138 atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado; lo cual implica de facto una configuración de la causal denominada “el hecho de un tercero”. **(ii)** adicionalmente, el mismo informe policial de accidente de tránsito, estableció las hipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito; **(iii)** el croquis del IPAT no es claro y preciso en exponer cual era el sentido vial en el que se movilizaban los vehículos involucrados en el supuesto accidente, como quiera que el mismo señala lo siguiente *“posible trayectoria vial”*, y junto con la posición de los vehículo, es claro que hubo inferencia en las condiciones viales y climáticas que afectan el buen desempeño de la conducción. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que la parte demandante sea responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por la demandante.

**Frente a la pretensión “SEGUNDA”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Se resalta que la parte demandante incurre en un error técnico jurídico al solicitar que se declare civilmente responsable a la compañía MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A., por los perjuicios presuntamente ocasionados a la parte demandante, evadiendo el hecho de que mi prohijada no tuvo injerencia o participación alguna en el accidente de tránsito presuntamente ocurrido el 31 de octubre del 2021. La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad entre ambos, sin embargo, mi prohijada no tuvo injerencia en la producción del supuesto daño y no participó de ninguna forma en los acontecimientos o la provocación del hecho, por lo que no puede ser declarada como responsable por la producción del mismo.

En el caso que nos ocupa, surge palmario que no se encuentran plenamente probados los elementos configurativos de la responsabilidad civil que se persigue y por lo mismo, al no nacer la obligación indemnizatoria de la parte pasiva, tampoco nace la de mi representada; sobre todo si se tiene en cuenta que la hipótesis consignada en el IPAT elaborado por la autoridad competente, en el que la parte actora fundamenta la presente acción, donde se atribuye responsabilidad del evento de tránsito al vehículo en el cual se movilizaba la hoy demandante, y adicionalmente se incorporar causales atribuidas a la condiciones viales y el estado del clima, circunstancias estas, que evidentemente alteran las condiciones para ejercer la función de conducción, y rompen con el nexo de causalidad al encontrar un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Así mismo, es necesario indicar que la existencia de un contrato de seguro con mi representada no se traduce en el surgimiento de obligación indemnizatoria a cargo de la compañía de seguros que represento, pues ésta se encuentra condicionada a que se pruebe de forma fehaciente y certera que se estructuró la responsabilidad civil que se pretende atribuir al extremo pasivo, situación que en el presente caso evidentemente no sucede.

Es importante resaltar que dicha obligación indemnizatoria se encuentra condicionada a que no se configure ninguna exclusión o causal de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir cada uno de los requisitos expuestos, se podría predicar la realización del riesgo asegurado.

**Frente a la pretensión “SEGUNDA”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, como quiera que no se haya acreditada la responsabilidad que pretende endilgar la parte demandante al extremo pasivo, debido a que **(i)** el IPAT adosado el presente asunto, consigna la causal 138 atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado; **(ii)** adicionalmente, el mismo informe policial de accidente de tránsito, estableció lashipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito; **(iii)** el croquis del IPAT no es claro y preciso en exponer cual era el sentido vial en el que se movilizaban los vehículos involucrados en el supuesto accidente, como quiera que el mismo señala lo siguiente *“posible trayectoria vial”*, y junto con la posición de los vehículo, es claro que hubo inferencia en las condiciones viales y climáticas que afectan el buen desempeño de la conducción. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que la parte demandante sea responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por la demandante.

Resulta preciso resaltar y exponer que, entre las partes mencionadas en los párrafos precedentes, no se pactó solidaridad ya que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC780-2020, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria, pues ante lo manifestado, la sentencia antes descrita, se pronunció, exponiendo lo siguiente:

“(…) *La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario* (…)” (Negrilla por fuera del texto original)

Por lo anterior, mi representada no ser tenida como responsable de los hechos objeto del presente litigio, como quiera que la única relación con el vehículo de placas JIN 361 está limitada a las condiciones del contrato de seguro pactado entre las partes, seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

**Frente a la pretensión “CUARTA”: ME OPONGO** a esta pretensión por resultar consecuencial a los requerimientos previos. Se insiste en todo caso que, ante la insuficiencia de elementos de convicción que demuestren no solo la existencia de la responsabilidad civil que se depreca en la demanda, sino también de los perjuicios requeridos, imposible resultaría la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, sin dejar de lado la exorbitante suma reclamada por las demandantes.

## OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Frente al Juramento Estimatorio, mismo que se encuentra señalado en el Art. 206 del C.G.P., presento mi oposición al mismo, pues bien, se ha venido reiterando que la demanda carece de sustento jurídico y probatorio que de alguna manera permita probar la responsabilidad civil reclamada. Adicionalmente, no sólo no se encuentra acreditada la responsabilidad que pretende endilgarle a los demandados, sino que no existe prueba del perjuicio alegado, ni referencia clara y expresa del ejercicio matemático de cuantificación efectuado para la obtención del mismo.

En este sentido lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, que*:*

*“(...) No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él (…) Luego, si no se tiene prueba del daño, pues el juramento estimatorio a lo sumo constituye —de ser razonable— prueba de su cuantía, no se puede reconocer indemnización en los términos reclamados por el recurrente, como ocurre en el presente asunto (…)”[[3]](#footnote-3)* (Negrillas fuera del texto original).

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al **lucro cesante**, debe advertirse que no obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Cristina Gallo efectivamente tuviera algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio, pues en el sistema RUAF Colombiano no se logra evidenciar información respecto a vinculación al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia que pertenece al régimen en salud subsidiado, lo que da cuenta que no cuenta que no cuenta con una vinculación laboral, que genere algún tipo de ingreso económico.

Respecto del **daño emergente**, es pertinente exponer que **(i)** dentro del plenario probatorio no obre prueba alguna respecto de los presuntos gastos por transporte pagados por la demandante, pues la misma no acredita el valor pretendido, pues se observa únicamente unas cuentas de cobro que no cuentan con los requisitos establecidos para que los mismo sean establecidos como una factura o cuenta de cobro, conforme a los lineamientos del código de comercio. Así mismo es preciso resaltar, que no se especifica las fechas en las cuales se requirió el presunto servicio de transporte, pues las “cuentas de cobro” o “facturas” aportadas por la activa, contienen información que evidentemente solo buscan el beneficio de la parte demandante, como se observa en los documentos adosados el expediente, la inconsistencia en la información contenida en las cuentas de cobro o facturas aportadas, por cuento es evidente que hay valores irrisorios y aún más que no concuerdan entre ellos, mismo que se presuntamente se efectuaron bajo el mismo concepto; **(ii)** Bajo el análisis probatorio se encuentra que la activa adjunta el proceso, un presupuesto por compra de medicamentos, circunstancia esta que no se ha probado fehacientemente, pues como se observa en la historia clínica aportada en la demanda, la joven Valentina Salgado pertenece al sistema subsidiado y los medicamentos recetados fueron entregados por la misma EPS a la cual se encuentra afiliada. Adicionalmente se resalta que las presuntas facturas adosadas al proceso, no cuentan con los requisitos establecidos para su valides, y no tiene fecha que indique cuando se efectuó la posible adquisición de los medicamentos; y **(iii)** Finalmente, no hay prueba del supuesto gasto por alimentación que reclama la activa.

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

En los términos anteriores, queda presentada la OBJECIÓN al juramento estimatorio.

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

**EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA**

1. INEXISTENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA QUE PERMITAN ENDILGAR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE LOS DEMANDADOS – EL IPAT NO ES MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE

Por medio de la presente excepción, se pretende demostrar al despacho que la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en un Informe de Accidente de Tránsito (IPAT) para intentar endilgar responsabilidad civil en cabeza de los demandados. No obstante, no obran en el expediente más medios probatorios que den cuenta real y fidedigna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos del 31 de octubre del 2021, siendo el único elemento documental el IPAT, el cual no fue diligenciado por una persona testigo presencial de los hechos, y que además contiene hipótesis endilgadas al vehículo de placa HLB-474 donde se movilizaba la hoy demandante, y junto con ello las causales establecidas al estado de la vía y el estado del clima. Observándose una total orfandad de elementos que permitan corroborar lo que realmente ocurrió el día de los hechos. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

Respecto al valor probatorio de los informes policiales de accidente de tránsito, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-429 de 2003, en donde indicó que dicho documento se presume auténtico en relación con la persona que lo elaboró y su fecha. Sin embargo, su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso por lo que es una mera hipótesis, pues el agente de tránsito que lo elabora no presenció el accidente, veamos:

*“(...) Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo.*

*Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, como quiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal (…)”.*

Es claro entonces que, según la Corte Constitucional, de dicho documento sólo se puede presumir autenticidad de la persona que lo elabora y el momento en que lo hace. No obstante, el resto de información está sujeta a una futura acreditación por cuanto la persona que realiza el IPAT y el croquis, no estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, no fue un testigo presencial y el diligenciamiento de dicho informe se hace con base en el seguimiento de lo preceptuado en el artículo 149 de la Ley 769 de 2002, el cual dispone que:

*“(…) El informe contendrá por lo menos:*

*Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.*

*Clase de vehículo, número de la placa y demás características.*

*Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.*

*Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.*

*Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.*

*Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.*

*Descripción de los daños y lesiones.*

*Relación de los medios de prueba aportados por las partes.*

*Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes”. (negrita fuera del texto original).”*

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de este:

*“(…) Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”*

Una vez hecho el recuento normativo al respecto, se analizará el caso particular. Dentro de los medios de prueba que se aportan al proceso obra el IPAT del 31 de octubre del 2021. En este sentido, lo primero que se debe manifestar es que, como se dijo en líneas anteriores, el funcionario que realiza el informe no estuvo presente al momento de los hechos, como se observa en un extracto del documento:



Esta simple cuestión es determinante para aseverar que el diligenciamiento del informe se hace por una persona que desconoce todas las circunstancias que rodearon los hechos, por cuanto, se itera, no los presenció. Ahora bien, respecto de lo preceptuado en la parte normativa, el IPAT de ninguna manera puede endilgar responsabilidad a cualquiera de los involucrados en el evento de tránsito, pues se cimienta a través de una hipótesis, lo que quiere decir todo lo anterior, que la parte demandante únicamente fundamente sus pretensiones en un único medio de prueba que fue realizado por una persona que ni siquiera presenció los hechos.

Lo anterior debe ser analizado desde la perspectiva de la habilidad, destreza y experiencia en la conducción de vehículos que tenía el señor Juan Pablo Aramburo, la cual está plenamente acreditada. Por un lado, de acuerdo al IPAT obrante en el expediente digital, se observa que el conductor del vehículo de placas JIN-361 contaba con licencia de conducción para el momento de los hechos, sin ninguna restricción para conducir:



Recordemos qué es una licencia de conducción, según la Ley 769 de 2002:

*“(…) Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional (…)*”.

Pues bien, es el documento que autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta autorización está reglamentada por el Ministerio de Transporte por expresa disposición de la norma ibídem:

*“(…) ARTÍCULO 20. El Ministerio de Transporte definirá mediante resolución las categorías de licencias de conducción y recategorizaciones, lo mismo que las restricciones especiales que deben tenerse en cuenta para la expedición de las licencias según cada categoría (…)*”

Es por lo anterior que el Ministerio de Transporte expide la Resolución 001500 del 27 de junio de 2005, la cual tiene por objeto:

*“(…) Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir las nuevas categorías de las Licencias de Conducción, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 769 de 2002 (…)”*

El fin teleológico de la norma es proteger a todos los actores viales, pues los automotores deben ser conducidos por personas de acuerdo a su conocimiento y experticia, además porque en tratándose de servicio público los conductores deben tener especiales conocimientos, experiencia y experticia para maniobrar los vehículos de carga, por su envergadura. Es por lo anterior que las licencias de conducción se categorizan de acuerdo a la destinación del vehículo que se vaya a conducir, es decir, en particular o público:

*“(…) Artículo 3º. Clasificación de las Licencias de Conducción. Las Licencias de Conducción se clasifican así:*

*1. Licencias de Conducción para vehículos automotores destinados al servicio particular. Dentro de esta clasificación quedan comprendidos los vehículos de servicio oficial, diplomático, consular y de misiones especiales.*

*2. Licencias de Conducción para vehículos automotores destinados al servicio público (…)*”

En tratándose de automotores de servicio particular, la Resolución dispone:

*“(…) Artículo 4°. Categorías de la Licencia de Conducción de vehículos automotores de servicio particular. Las licencias de conducción de los vehículos de servicio particular tendrán las siguientes categorías, subdivididas por nomenclatura:*

*A1 Para la conducción de motocicletas con cilindrada hasta de 125 c.c. A2 Para la conducción de motocicletas, motociclos y mototriciclos con cilindrada mayor a 125 c.c.*

*B1 Para la conducción de automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses.*

*B2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.*

*B3 Para la conducción de vehículos articulados.*

*Parágrafo 1°. Dentro de una misma nomenclatura, el titular de la Licencia de Conducción de mayor categoría podrá conducir vehículos de categoría inferior. Parágrafo 2º. Cuando los vehículos agrícolas y montacargas transiten por las vías públicas, su conductor deberá portar licencia de conducción como mínimo B1. Parágrafo 3º. Los pequeños remolques y semirremolques que son enganchados o halados por un automotor, se le exigirá a su conductor categoría de Licencia de Conducción de acuerdo con el vehículo automotor que conduzca”.* (negrillas propias)

En consecuencia, debido a que correspondía al demandante probar los fundamentos de sus pedimentos, en específico, demostrar la causa efectiva del evento de 31 de octubre del 2021 y en vista de la ausencia probatoria que milita en el libelo genitor, de manera consecuente deberán ser negadas todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

En conclusión, resulta evidente entonces que la parte demandante pretende soportar sus pretensiones en un único documento, el cual, como se dijo antes, no puede ser tenido como prueba absoluta e irrefutable de lo que realmente ocurrió, principalmente, porque quien lo diligencia no presenció los hechos, acude en momentos posteriores a la ocurrencia de lo sucedido y se limita a diligenciar el informe de acuerdo a lo estipulado en la norma de tránsito nacional. Aunado a lo anterior, dicho documento debe ser valorado conforme a lo consignado en el mismo, sin desconocer que existen causales atribuidas al conductor del vehículo de placa HLB-47A en el que movilizaba la hoy demandante; y junto con ello el señor Juan Pablo Aramburo era un conductor altamente experimentado, capacitado y autorizado para conducir vehículos de servicio particular. Finalmente, la consecuencia necesaria frente a la ausencia y orfandad de medios de prueba que permitan esclarecer la causa efectiva de los hechos plurimencionados, implica correlativamente que se deban negar las pretensiones de la demanda.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

1. NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PRETENDE ENDILGAR A LOS DEMANDADOS POR LA CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

La parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del 2021 hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo de placa JIN-361, pues en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que da cuenta de las condiciones *tempo* espaciales de la ocurrencia de un accidente, es claro respecto a la atribución de responsabilidad que se endilga al conductor del vehículo de placa HLB-47A en el cual se movilizaba la hoy demandante, junto con las causales atribuidas al estado de la vía y el clima, siendo estas circunstancias de fuerza mayor que evidentemente alteran la ejecución de la conducción de vehículos.

Uno de los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual, es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso. Este elemento debe demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. En materia de accidentes de tránsito, el Informe Policial de Accidente de Tránsito es la prueba determinante de su ocurrencia y de las condiciones de tiempo, lugar y vehículos involucrados. Efectivamente, cuando ocurre un accidente se levanta un informe con el fin de esclarecer los hechos y dejar constancia de lo sucedido. Por ello, se considera a dicho informe como un elemento de juicio que permite realizar un análisis del esquema fáctico debido a que precisa las causas del impacto, la identificación de los involucrados, lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho, estado de la vía, huella de frenado, grado de visibilidad, colocación del vehículo, descripción de los daños y lesiones, testigos presenciales, entre otros. Sobre la importancia de acreditar el accidente de tránsito, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente:

*“(…) Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción del lugar de la colisión (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); (iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho); y (iv) las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente (…)” (negrita fuera del texto original)*

De tal suerte, la declaratoria de Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. De esa manera, el reclamante en acción extracontractual deberá enfilar su causa y labor demostrativa a *“aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad extracontractual, como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad”* (CSJ SC del 9 de feb. de 1976). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio, no debe conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, correspondiendo a la parte demandante acreditar la culpa y el nexo causal en las acciones desarrolladas por su contraparte. A su vez, existe consenso en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, la Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por Responsabilidad Civil Extracontractual, saber “a*) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”.*

Ahora bien, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 31 de octubre del 2021, el cual refiere atribución de responsabilidad del accidente de tránsito, al vehículo de placa HLB-47A donde se movilizaba la joven Valentina Salgado Gallo, y adicionalmente se observa en dicho informe las causales atribuidas al estado de la vía y el clima, las cuales son las contenidas en los numerales 302. 304, y 308 *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, que dan cuenta del estado del lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito. Es evidente, que estas últimas hipótesis alteran el buen ejercicio de la conducción, existiendo una causal de fuerza mayor y/o caso fortuito que rompe el nexo causal, como uno de los elementos indispensables para establecer la responsabilidad civil.

Al respecto, resulta necesario exponer que la fuerza mayor y/o caso fortuito es un eximente de responsabilidad, el cual consisten en cualquier evento externo, que por sus características de imprevisibilidad e irresistibilidad, y que pueden producir un daño. Respecto de lo dicho, es necesario traer a consideración la postura de la H. Corte Suprema en la sentencia SC0829 del 29 de abril del 2005, que expone:

*“(…) Para dilucidar estos cuestionamientos, es necesario memorar, así sea sucintamente, que la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es ‘el imprevisto a que no es posible resistir’ (art. 64 C.C., sub. art. 1º Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos.*

*No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular –in concreto-, pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no.*

*Justamente sobre este particular, bien ha precisado la Sala en jurisprudencia uniforme, que “la fuerza mayor no es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos” (sent. 145 de 7 de octubre de 1993); por eso, entonces, ‘la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situación específica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento –acompasadas con las del propio agente-’ (sent. 078 de 23 de junio de 2000), sin que un hecho pueda ‘calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito’ (cas. civ. de 20 de noviembre de 1989; cfme: sent. 087 de 9 de octubre de 1998) (…)” (*negrillas propias)

Junto con lo anterior, es pertinente relacionar la sentencia[[4]](#footnote-4)de la Corte Suprema en la que se expuso:

*“(…) cuando el daño tiene origen en una actividad susceptible de ser considerada como peligrosa, la jurisprudencia, con apoyo en el artículo 2356 del Código Civil, (G.J. Tomo L. pág. 439), igualmente ha implantado un régimen conceptual y probatorio cuya misión no es otra que la de favorecer a las víctimas de ciertos accidentes en que el hombre, utilizando en sus propias labores fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control y que por lo tanto son aptas para romper el equilibrio antes existente, de hecho ha colocado a los demás asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión.*

*(…)*

*(…) entre las nociones de caso fortuito y de fuerza mayor contempladas a la luz del Art. 1° de la Ley 95 de 1890 y otras disposiciones que a ellas aluden como los artículos 1604, 1616, 1731 y 1733 del C. Civil, no existe realmente diferencia apreciable en términos de la función que ambas están llamadas a cumplir en el ámbito de la legislación civil vigente según ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta corporación (G.J. T. CXCV1, pág. 91), corresponde ahora hacer énfasis en que estas expresiones normativas se refieren, esencialmente, a acontecimientos anónimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales de una causa extraña que a este no le sea imputable.*

*(…)*

*Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable, unida a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G.J. T. XLII, pág. 54) y son, en consecuencia, los siguientes:*

*a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él, aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como la hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que ‘…cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor...’ (G.J. Tomos LIV, página, 377, y CLVIII, página 63).*

*b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente - sojuzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito; y,*

*c) Que el mismo hecho, imprevisible e irresistible, no se encuentre ligado al agente, a su persona ni a su industria, de modo tal que ocurra al margen de una y otra con fuerza inevitable, por lo que bien puede decirse, siguiendo enseñanzas de la doctrina científica inspirada a su vez en jurisprudencia federal suiza (Andreas Von Thur. Tratado de las Obligaciones. Tomo II, cap. VII, pág. 68), que para poder reconocer conforme a derecho un caso fortuito con el alcance eximente que en la especie litigiosa en estudio sirvió para exonerar de responsabilidad a la compañía transportadora demandada, ha de tratarse de ‘...un acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior sobre la industria, acontecimiento imprevisible y que no hubiera sido posible evitar aun aplicando la mayor diligencia sin poner en peligro toda la industria y la marcha económica de la empresa y que el industrial no tenía por qué tener en cuenta ni tomar en consideración…’, de suerte que en sarta lógica se impone concluir, siguiendo este criterio, que las fallas en el mecanismo u operación de ciertas cosas o actividades peligrosas, de cuyo buen funcionamiento y ejecución exenta de peligros es garante el empresario frente a potenciales víctimas según se dejó visto líneas atrás en la primera parte de estas consideraciones, por faltarles el requisito de exterioridad nunca pueden configurar, en la modalidad de caso fortuito o de fuerza mayor, una causa exoneratoria capaz de contrarrestar la presunción* *de culpa que consagra el Art 2356 del C. Civil. (…)”* (negrillas fuera del texto original)

Con relación a lo expuesto, resulta claro reiterar que la fuerza mayor o el caso fortuito, son eximentes de responsabilidad, dentro de la cual uno de los elementos de responsabilidad, siendo la relación de causalidad es un requisito *sine qua non* para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas. El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia[[5]](#footnote-5). En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

*“(…) Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil (…)”[[6]](#footnote-6)*

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa del daño, *“(…) la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo, (…) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (…)*”[[7]](#footnote-7). Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño. En otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que sea posible declarar responsabilidad civil, es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización…”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible (…)*”[[8]](#footnote-8)

Para el caso bajo análisis, por la evidente ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer los hechos del 31 de octubre del 2021. No obstante, es indispensable resaltar las hipótesis atribuidas al estado de la vía, las cuales fueron la 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, como se observa en el IPAT, así:



De lo consignado en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, resulta claro y evidente que las condiciones viales y climáticas del lugar donde ocurrió el presunto accidente tránsito presentaban una alteración, que a todas luces cambian el buen ejercicio de la conducción de vehículos. Junto lo anterior, es pertinente exponer que la norma regulatoria en accidentes de Tránsito, siendo la Resolución 011268 del 6 de diciembre del 2012, contiene las hipótesis y/o factores que pueden intervenir en la realización y configuración del accidente de tránsito, mismas que pueden ser predicables tanto del vehículo, **la vía**, o el pasajero. En ese orden de ideas, se infiere que la configuración de los hechos objeto del presente litigio, se vieron efectuadas por el estado de la vía en el cual se movilizaban los vehículos involucrados en el litigio, donde claramente el IPAT expone una ausencia en la demarcación vial, superficie húmeda de la vía, y adicionalmente el estado del clima influyó mucho en la presunta ocurrencia del evento, pues el día 31 de octubre del 2021 alrededor de las 03:00 horas de la mañana en el sector de la vía a Ginebra (V), estaba lloviendo, lo cual limita la visibilidad para todos los conductores.

Por todo lo consignado, no es posible acreditar la configuración de responsabilidad civil en cabeza de los demandados por cuanto el requisito del nexo causal se encuentra desvirtuado bajo la configuración de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, analizado bajo las causales establecidas en el IPAT y el croquis, mismos que describen las condiciones y circunstancias viales y climáticas del lugar donde ocurrió el presunto accidente de tránsito.

Así pues, el artículo 167 del Código General del Proceso, determinó que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Siendo claro como el incumplimiento de tal carga procesal consecuentemente deviene en el fracaso de sus pretensiones, no siendo de recibo que el extremo actor pretenda la prosperidad de sus pretensiones con asiento en su exclusivo dicho.

En conclusión, es claro que al interior del presente trámite no existe prueba alguna de que las lesiones padecidas por la señora Valentina Salgado hayan devenido única y exclusivamente de la conducción del vehículo de placa JIN-361, por cuanto el IPAT atribuye una causal de responsabilidad al vehículo tipo motocicleta de placa HLB-47 A, en el cual se movilizaba la hoy demandante, junto con las claras circunstancias viales y climáticas, consignadas en el mismo informe, por tanto, al ser clara la ausencia responsabilidad civil extracontractual que se pretende endilgar a la pasiva consecuentemente las pretensiones de la demanda se encuentran avocadas a su fracaso.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

1. CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE EXONERACIÓN DENOMINADA “HECHO DE UN TERCERO” EN CABEZA DEL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA DONDE SE TRANSPORTABA LA VÍCTIMA

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados, como quiera que en el presente caso operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho exclusivo de un tercero”. Lo anterior, puesto que el Informe Policial del Accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del 2021 refleja que al conductor de la motocicleta de placas HLB-47 A, vehículo en el cual se movilizaba la hoy demandante, se le atribuyó la codificación No. 138 en la ocurrencia del accidente, como se observa:



Ahora bien, es claro que el Patrullero que realizó el informe policial del accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del 2021, determinó que al señor Bryan Barandica Cuacicun conductor de la motocicleta HLB-47 A le asistía responsabilidad en la ocurrencia del accidente puesto que le fue atribuida la codificación 138. Es decir, que en la ocurrencia del accidente tuvo injerencia significativa el actuar de quien se encontraba conduciendo la motocicleta en la que viajaba como pasajera Valentina Salgado Gallo. Por lo que no podría entonces intentar endilgarse responsabilidad a la pasiva, cuando en el presente caso se encuentra clara la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre los perjuicios sufridos por la demandante Valentina Salgado y la conducta del que es señalado de ser responsable. De modo tal que la conducta del tercero ajeno a las partes, que sea imprevisible e irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar su responsabilidad. Frente a lo anterior y antes de entrar a estudiar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad al caso concreto, es necesario hacer referencia a la señalada norma del artículo 64 del Código Civil y posteriormente, hacer un recorrido por los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes con los cuales se le ha dado desarrollo a la figura del hecho de tercero, como causal que enerva la responsabilidad.

*“(…) ARTÍCULO 64°. Fuerza mayor o caso fortuito: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. (…)”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2008, fue enfática al señalar que:

*“(…) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerarte de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible (…)” [[9]](#footnote-9)*

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre los perjuicios sufridos por la demandante Valentina Salgado y la conducta del que es señalado de ser responsable. De modo tal que la conducta del tercero ajeno a las partes, que sea imprevisible e irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar su responsabilidad. Frente a lo anterior y antes de entrar a estudiar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad al caso concreto, es necesario hacer referencia a la señalada norma del artículo 64 del Código Civil y posteriormente, hacer un recorrido por los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes con los cuales se le ha dado desarrollo a la figura del hecho de tercero, como causal que enerva la responsabilidad.

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado[[10]](#footnote-10), quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero, así:

*“(…) Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consiste en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel (…)”* (Subrayado fuera del texto original)

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo[[11]](#footnote-11) que:

*“(…) Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.*

*(…)*

*Por otra parte, a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, (…)” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)*

Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

*“(…) Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad (…) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria (…)”[[12]](#footnote-12)*

En ese orden de ideas, es claro que el hecho de tercero es aquel elemento de ruptura del nexo causal entre el acto u omisión del agente y el daño que se le imputa. Por tanto, entremos a estudiar cada uno de sus requisitos a la luz del caso concreto:

1. **Irresistibilidad.**

Resulta importante señalar que para el conductor del vehículo de placas JIN-361 era imposible resistirse a la impericia e imprudencia del conductor de la motocicleta HBL-47 A en que viajaba Valentina Salgado Gallo como pasajera y a quien le fue atribuida la codificación No. 138 en la ocurrencia del accidente. Máxime, cuando se evidencia la ausencia de los elementos indispensables para ejercer la conducción de vehículos, como es el técnico mecánico del vehículo, y adicionalmente en la búsqueda en base de datos del SIMIT, se encontró del señor Brayan Barandica Cuaicuan, presenta un comparendo por no portar SOAT, lo que a todas luces expone la irresponsabilidad, y deber de cuidado que le asiste, por lo cual resulta confirmar en total medida que el señor Juan Pablo Aramburo fue totalmente irresistible la falta de responsabilidad, cuidado y atención a las obligaciones normativas de tránsito con la que conducía el señor Brayan Barandica Cuaicuan para el momento de los hechos. Por tanto, es dable concluir que la irresponsabilidad y el deber de cuidado de un conductor que se movilizaba en vías de amplia circulación como conductor de un vehículo de alta peligrosidad, se constituyó como una conducta irresistible para el conductor del vehículo de placas JIN-361.

1. **Emana de un tercero totalmente ajeno.**

Como es evidente, la conducción del vehículo de placas HBL-47 A correspondía a un tercero que nada tenía que ver con el conductor del vehículo asegurado por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Por tanto, la omisión de emplear la debida prudencia y pericia, y deber objetivo de cuidado en el ejercicio de la conducción de un vehículo de tan alta accidentalidad, es exclusivamente atribuible al señor Brayan Barandica Cuaicuan. Quien como conductor de la motocicleta en la cual se movilizaba la hoy demandante Valentina Salgado tenía la obligación de emplear la debida diligencia y prudencia en el ejercicio de la conducción a fin de propender por la seguridad de su acompañante y de los demás agentes del tránsito. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control de los Demandados.

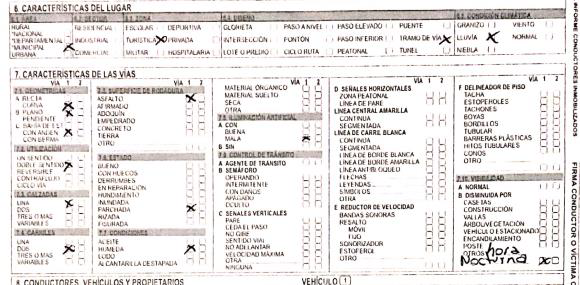
1. **La conducta del tercero es la causa del daño**

Finalmente, debe advertirse que la conducta desplegada por el señor Brayan Barandica Cuaicuan en su calidad de conductor de la motocicleta de placas HBL-47 A constituye la causa del hecho dañoso que suscitó el presente litigio, pues al realizar el análisis de causalidad, es posible dar por hecho que si el tercero hubiera cumplido con la normatividad de tránsito, muy probablemente, no hubiera ocurrido la colisión de los vehículos pluricitados y, en ese sentido, no se habría causado daño alguno en la humanidad de la señora Valentina Salgado Gallo.

En conclusión, de todo lo anteriormente explicado, es perfectamente lógico concluir que para el conductor del vehículo de placas JIN-361, fue totalmente irresistible e imprevisible sortear la falta de cuidado, responsabilidad del señor Brayan Barandica como conductor de la motocicleta de placas HLB-47 A. Quien en ejercicio de una actividad peligrosa no empleó la debida prudencia y pericia al maniobrar, más aún cuando se encontraba conduciendo un vehículo de tal alta accidentalidad como es una motocicleta. Por tanto, dado que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO” en cabeza del señor Brayan Barandica Cuaicuan, se enervó la responsabilidad de los Demandados y no podrán ser condenados a indemnizar a los Demandantes.

1. CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD DENOMINADA “HECHO DE UN TERCERO” EN CABEZA DEL CESIONARIO DE LA VÍA, DADA LA AUSENCIA DE MARCACIÓN VIAL Y LA AUSENCIA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna al demandado Juan Pablo Aramburo conductor del vehículo de placas JIN-361, como quiera que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “*hecho exclusivo de un tercero*”. Lo anterior, puesto que el Informe Policial del Accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del 2021 refleja que la vía Ginebra- Guacarí, se encontraba sin iluminación artificial, tal como se evidencia:



Ahora bien, es claro que el Patrullero que realizó el Informe Policial del Accidente de Tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2021, determinó como característica de la vía, que la misma se encontraba con mala iluminación. Es claro que de las cuatro categorías que describen la luz de la vía, el patrullero descartó las dos primeras (Con luz, con buena luz) y finalmente determinó que la vía se encontraba con **mala iluminación.** Es decir, en el lugar de ocurrencia del accidente no existía una iluminación vial óptima para que el corredor fuese transitado con seguridad. Lo que en ningún caso es obligación de los demandados, sino del Concesionario Rutas del Valle o la entidad que deba ejercer dicha función.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre las presuntas lesiones de la demandante Valentina Salgado Gallo y la conducta del que es señalado de ser responsable. De modo tal, que la conducta del tercero ajeno a las partes, que tenga en carácter de imprevisible, irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar su responsabilidad. Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2008, fue enfática al señalar que:

*“(…) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerarte de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible (…)” [[13]](#footnote-13)*

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado[[14]](#footnote-14), quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero, así:

*“(…) Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consiste en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel (…)”* (Subrayado fuera del texto original)

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo[[15]](#footnote-15) que:

*“(…) Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.*

*(…)*

*Por otra parte, a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, (…)” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)*

Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

*“(…) Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad (…) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria (…) ”[[16]](#footnote-16)*

En ese orden de ideas, es claro que el hecho de tercero es aquel elemento de ruptura del nexo causal entre el acto u omisión del agente y el daño que se le imputa. Por tanto, entremos a estudiar cada uno de sus requisitos a la luz del caso concreto:

1. **Irresistibilidad.**

Resulta importante señalar que para el conductor del vehículo de placas JIN-361 era imposible resistirse a la omisión del Concesionario Rutas del Valle o la entidad que deba ejercer dicha función.. Entidad encargada del mantenimiento y operación de la vía Ginebra Guacarí, por no instalar la iluminación vial adecuada que evitara que el vehículo perdiera visibilidad en una vía completamente oscura y se diera la colisión entre los automotores. Por tanto, es dable concluir que la omisión unilateral del Concesionario Rutas del Valle entidad encargada del mantenimiento y operación de la vía Ginebra - Guacarí, por no instalar la iluminación vial adecuada para la seguridad vial, se constituyó como una conducta irresistible para el conductor del vehículo de placa JIN-361.

1. **Imprevisibilidad.**

En segundo lugar, es necesario señalar que para el conductor del vehículo de placas JIN 361, era totalmente imposible prever que en el lugar donde ocurrió el accidente no se encontraba instalada la iluminación adecuada para transitar con seguridad en la vía. Lo anterior, puesto que para el momento de la ocurrencia del accidente la vía estaba oscura y en ausencia de una iluminación necesariaque permitiera visibilizar la carretera. Máxime, cuando el accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 3:00am, hora en la que la vía se encontraba totalmente carente de luz solar.

Dicho de otra forma, el conductor del vehículo de placas jin-361, basado en las reglas de la experiencia y la buena fe, confió en que la vía se encontraría totalmente iluminada como dictan las normas municipales, a fin de que fuera seguro para los conductores transitar por esta carretera. Por esta razón, resultó totalmente imprevisible que para el momento del accidente, el Concesionario Rutas del Valle o quien deba ejercer dicha función, entidad encargada del mantenimiento y operación de la vía Ginebra Guacarí, no hubiese instalado las respectivas luces para la seguridad vial.

1. **Emana de un tercero totalmente ajeno.**

Como es evidente, el acto de instalar las iluminaciones correspondientes para la seguridad del tránsito en las carreteras de Ginebra - Guacarí, correspondía a un tercero que nada tenía que ver con el conductor, ni con la sociedad propietaria del vehículo. Por tanto, la omisión de instalar iluminación vial, es exclusivamente atribuible al Concesionario Rutas del Valle o la entidad que ejerza dicha función, entidad que por ser encargada del mantenimiento y operación de la vía Ginebra - Guacarí, tenía dicha obligación. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control del Demandando.

En conclusión, de todo lo anteriormente explicado, es perfectamente lógico concluir que para el conductor del vehículo de placas JIN-361 fue totalmente irresistible e imprevisible sortear la omisión del Concesionario Rutas del Valle o la entidad que ejerza dicha función Entidad encargada del mantenimiento y operación de la vía Ginebra - Guacarí, de instalar las iluminaciones viales adecuadas que tenderían a evitar la pérdida de la visibilidad de los conductores de la vía Ginebra - Guacarí. Por tanto, dado que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “HECHO EXLUSIVO DE UN TERCERO” en cabeza del Concesionario Rutas del Valle o la entidad que ejerza dicha función, se enervó la responsabilidad de los Demandados y no podrán ser condenados a indemnizar a los Demandantes.

Ruego señor Juez declarar probada esta excepción.

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR NO ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

Se formula el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora toda por cuanto la ausencia de medios probatorios que acrediten el hecho dañoso, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por las demandantes, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil.

La relación de causalidad es un requisito sine qua non para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas.

El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia[[17]](#footnote-17). En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

*“Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil”[[18]](#footnote-18)*

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa eficiente del daño, “***la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo****, (…) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo.* ***Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante***”[[19]](#footnote-19)

Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o, en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que se posible declarar responsabilidad civil extracontractual es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“****En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización.*** *El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización…”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible. […][[20]](#footnote-20)”*

Para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados y consecuentemente, a MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A.., en razón a que no están acreditadas las circunstancias modales y tempo-especiales del hecho de tránsito. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Solicito a señor Juez declarar probada esta excepción.

**EXCEPCIONES FRENTE A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS INVOCADAS EN LA DEMANDA**

1. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LA DEMANDANTE

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de la demandante, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues en la demanda de solicitan $92.800.000, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios “*se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables*” [[21]](#footnote-21). Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “*constituye un «regalo u obsequio*»” por el contrario, se encuentra encaminado a “*reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares*”[[22]](#footnote-22), con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia[[23]](#footnote-23)

Inicialmente, se debe advertir al despacho que existe una desmesurada solicitud de perjuicios morales por valor de $ 92.800.000, lo cual es a todas luces improcedente, puesto que refleja un evidente ánimo especulativo y una errónea tasación de los perjuicios, en tanto que los mismos resultan exorbitantes según los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que han sido reconocidos en casos excepcionales a víctimas cuyas lesiones han sido más graves. Mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad, ni siquiera existen dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) que permita verificar la gravedad de los hechos, por lo tanto, no es posible saber la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan las siguientes sumas de dinero:

* Para Valentina Salgado (lesionada):$46.400.000
* Para Cristina Gallo (madre de la lesionada): $46.400.000

Para ilustrar de forma puntual la manera en que la Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en sentencia del 6 de mayo de 2016 con radicación No. 2004-00032-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de una mujer de 17 años, que a raíz de las lesiones derivadas de un accidente de tránsito debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y verse obligada a usar un catéter que le atravesaba su cabeza, cuello y pecho y que le *“(…) restringía la posibilidad de concurrir a sitios controlados por detectores magnéticos, porque estos aparatos descontrolan la válvula; se obstaculiza bañarse en piscinas, realizar actividades deportivas, tener relaciones sentimentales (…)*”22. En esta ocasión, la Corte reconoció por concepto de daño moral el monto de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000).

Por tanto, es claro el ánimo e intención de lucro de la parte demandante al pretender el reconocimiento de un perjuicio moral sobre $ 92.800.000., para las demandantes, cuando en casos de mayor gravedad la Corte Suprema de Justicia ha reconocido cifras mucho menores. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En atención a los argumentos expuestos, la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

*“(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño,* ***lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable****. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (…)*”23. (Negrillas fuera del texto original).

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, lo que pretende probar la parte demandante y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte. Además, la parte demandante solicita valores superiores incluso a los reconocidos en caso de muerte de la víctima y, en el presente caso, se trata de un lesionado, además, ni siquiera reposa en el expediente dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) que permita establecer la gravedad de las lesiones. Por otro lado, sus peticiones son abiertamente exageradas, inconducentes e injustificadas por cuanto solicita el reconocimiento de sumas de dinero que han sido concedidas excepcionalmente en casos de mayor gravedad. Recordemos el caso de la víctima a la que le tuvieron que amputar su miembro inferior izquierdo y que la Corte reconoció la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) por concepto de daño moral, mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad y ni siquiera existen dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) no tiene fecha de estructuración, pero se pretenden $ 92.800.000, para las demandantes.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

1. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ASÍ COMO SU CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA Y PRETENDIDA POR LAS DEMANDANTES

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, el reconocimiento del daño a la vida en relación, se da única y exclusivamente a la víctima directa en razón al daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones.

Es precioso, que, con base en lo anterior, traigamos a consideración el postulado de la H. Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 29 de marzo de 2017, en la que se indicó lo siguiente:

*“(…) b) Daño a la vida de relación****: Este rubro se concede únicamente a la víctima directa*** *del menoscabo a la integridad como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud,* ***que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales*** *(…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Por la postura expuesta, se cree necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

Pues bajo la comprensión que se desprende de la lectura del escrito genitor, se evidencia una desmesurada solicitud de perjuicios por concepto de daño a la vida en relación por un valor de $185.600.000 a favor de Valentina Salgado y Cristina Gallo. Claramente, es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación del daño a la vida en relación, y la errónea solicitud de dicho concepto en favor de la señora Cristina Gallo, atendido lo ya expuesto, donde el daño aquí reclamado es única y exclusivamente reconocido a la víctima directa del menoscabo, es por ello que no hay lugar al reconocimiento de dicha pretensión a cualquier otro reclamante.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, porque, sumado a la ausencia de demostración de la responsabilidad que se pretende endilgar, no es viable el reconocimiento a cualquier reclamante distinto a la víctima directa, además, y sin perjuicio de lo anterior, las sumas solicitadas exceden los límites concedidos por esta jurisdicción para este tipo de perjuicio.

Por todo lo anterior, solicito respetuosamente al Juzgador declarar probada esta excepción.

1. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE

En el caso objeto de estudio no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante toda vez que en expediente ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Cristina Gallo efectivamente tuviera algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio, pues en el sistema RUAF Colombiano no se logra evidenciar información respecto a vinculación al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia que pertenece al régimen en salud subsidiado, lo que da cuenta que no cuenta que no cuenta con una vinculación laboral, que genere algún tipo de ingreso económico.

Es pertinente manifestar que el lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por lasvíctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

Para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(…) *en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (…) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…)*

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (…).”[[24]](#footnote-24)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente.

Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente:

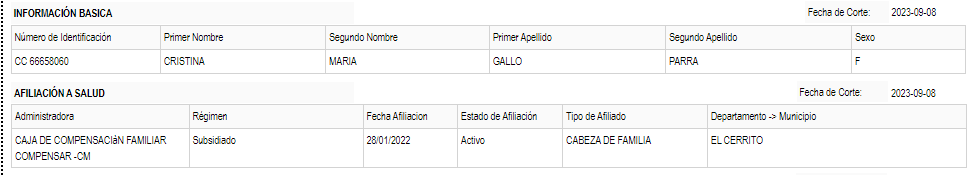
“(…) *Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

“(…) *resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”25* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan por lucro cesante por la suma de: $11.716.941, sin embargo, ese reconocimiento no es procedente por lo que se pasa a explicar:

1. **No hay prueba de que haya existido o exista una relación laboral.** La señora Cristina María Gallo, no adosó al proceso prueba fehaciente de haber estado vinculada laboralmente, pues si bien la misma manifiesta haber desempaño actividades de servicio doméstico, la norma es clara en manifestar que dichas relaciones laborares obligan al empleador a afiliar a sus trabajadores a al sistema de seguridad social, circunstancia esta que no se evidencia, como quiera que bajo la búsqueda en la plataforma RUAF, la señora Gallo no presenta ningún registro a al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia una afiliación al sistema de salud, bajo el régimen subsidiado, circunstancia esta que da cuenta de la ausencia de vinculación laboral de la hoy demandante.
2. **No hay prueba del presunto ingreso económico:** Como ya se expuso en el anterior pronunciamiento, es evidente la ausencia probatoria respecto a algún vínculo laboral de la señora Cristina Gallo y junto con ello del valor cierto percibido, pues a pesar de que existe una presunta constancia laboral, misma que será objeto de ratificación bajo los parámetros normativos, no se observa en dicho documentos el ingreso percibido por la hoy demandante, ni mucho menos donde ejercía dicha actividad, o su horario laboral, lo que a todos luces nos lleva a establecer que nunca medió una relación laboral vigente como fuente de ingresos económicos.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento del concepto indemnizatorio por lucro cesante consolidado, por cuanto **(i)** En IPAT, endilga la causal 138 al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba como pasajera Valentina Salgado; **(ii)** adicionalmente se observa que el mismo Informe Policial de Accidente de Tránsito consigna causales relacionadas con el estado de la vía y el estado del clima en el lugar donde se presentó el supuesto accidente de tránsito, las cuales son 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* circunstancias estas que evidentemente alteran el buen ejercicio de la conducción **(iii)** No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Cristina Gallo efectivamente tuviera algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio, pues en el sistema RUAF Colombiano no se logra evidenciar información respecto a vinculación al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia que pertenece al régimen en salud subsidiado, lo que da cuenta que no cuenta que no cuenta con una vinculación laboral, que genere algún tipo de ingreso económico.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

1. IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE SOLICITADO

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el proceso de la referencia no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, por cuanto no se acreditó la responsabilidad en la ocurrencia del accidente de tránsito en cabeza de los demandados, y por contera no le asiste responsabilidad a mi prohijada en todo caso. Anudado a lo anterior, tampoco se allegó medio de prueba que acredite siquiera los emolumentos supuestamente pagados por la parte actora por concepto de daño emergente, comoquiera que la documentación allegada no cumple con los parámetros previstos en la legislación comercial para ser catalogada como cuenta de cobro y, adicionalmente, los documentos referidos carecen de valor probatorio hasta que se rinda la ratificación, conforme se anunciará en el acápite de pruebas.

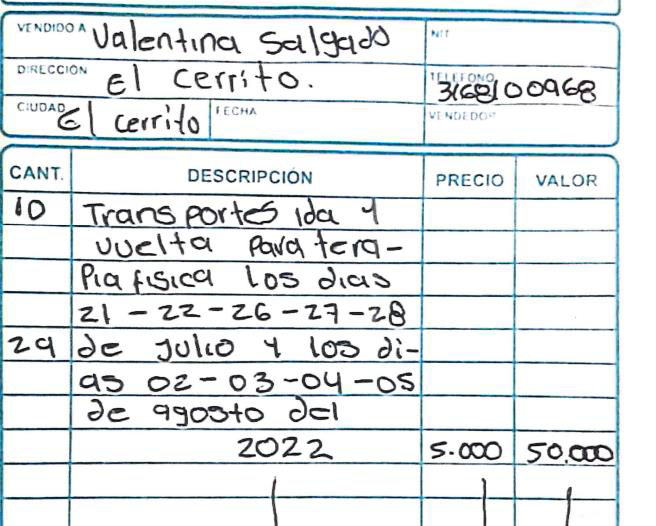
El daño emergente ha sido desarrollado jurisprudencialmente como la tipología de perjuicios que comprende la pérdida de elementos patrimoniales como consecuencia de los hechos dañosos, sin embargo, ha establecido ampliamente que para la procedencia del reconocimiento de los mismos resulta totalmente necesario acreditarlos dentro del proceso, carga que le asiste al reclamante de los perjuicios. Bajo estos derroteros, en el caso particular es completamente improcedente reconocimiento alguno a título de daño emergente, por cuanto no existe prueba cierta, clara y suficiente que acredite las sumas solicitadas por el extremo actor.

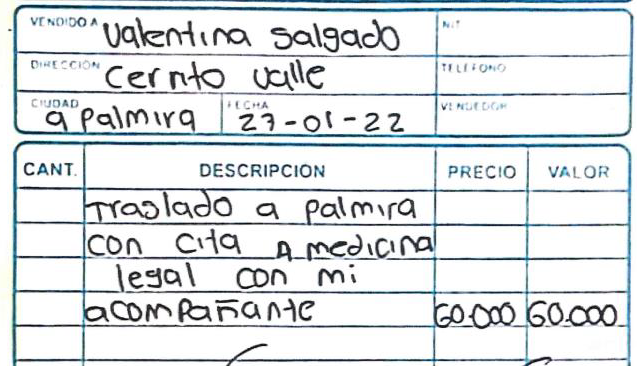
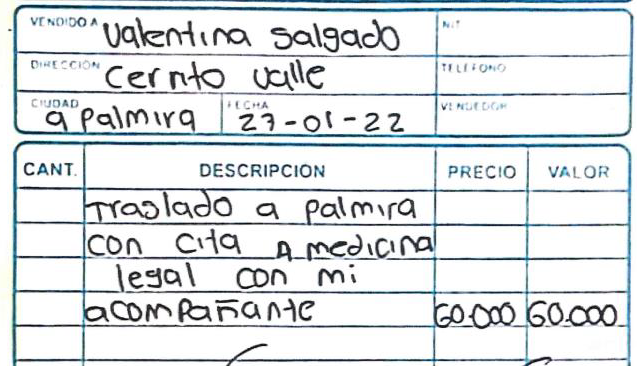
Es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en el escrito genitor del proceso. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. A efectos de entender la tipología de dichos perjuicios, vale la pena rememorar lo indicado por la honorable Corte Suprema de Justicia con respecto a la definición del daño emergente en los siguientes términos:

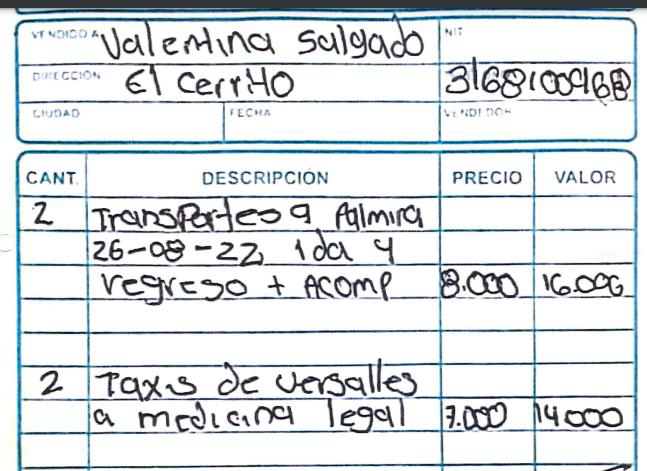
*“(…) De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento (…)”*

Con fundamento en lo anterior, podemos colegir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Ahora bien, la parte demandante manifiesta que con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del 2021 presuntamente se causaron erogaciones económicas por la suma de **$2.110.000 m/cte.**, por concepto del presunto transporte requerido por la demandante el valor de **$1.392.000 m/cte.,** por la presunta compra de medicamentos el valor de **$707.000 m/cte.,** y por gastos de comida el valor de **$11.000 m/cte.**

Sin embargo, y como se ha señalado a lo largo del presente escrito en relación a las presuntas erogaciones, las mismas se estiman de la siguiente manera **(i)** dentro del plenario probatorio no obre prueba alguna respecto de los presuntos gastos por transporte pagados por la demandante, toda vez que la misma no acredita el valor pretendido, pues se observa únicamente unas cuentas de cobro que no cuentan con los requisitos establecidos para que los mismo sean establecidos como una factura o cuenta de cobro, conforme a los lineamientos del código de comercio. Así mismo es preciso resaltar, que no se especifica las fechas en las cuales se requirió el presunto servicio de transporte, pues las “cuentas de cobro” o “facturas” aportadas por la activa, contienen información que evidentemente solo buscan el beneficio de la parte demandante, como se observa en las siguientes imágenes:

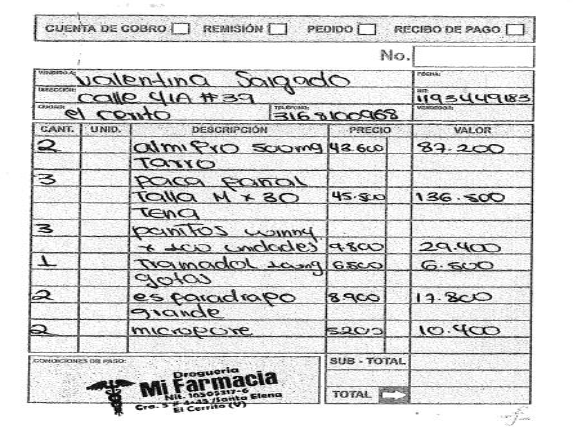




****

De lo anterior, resulta evidente resaltar la inconsistencia en la información contenida en las cuentas de cobro o facturas aportadas, por cuento es evidente que hay valores irrisorios y aún más que no concuerdan entre ello, mismo que se presuntamente se efectuaron bajo el mismo concepto.

**(ii)** Bajo el análisis probatorio se encuentra que la activa adjunta el proceso, un presupuesto por compra de medicamentos, circunstancia esta que no se ha probado fehacientemente, pues como se observa en la historia clínica aportada en la demanda, la joven Valentina Salgado pertenece al sistema subsidiado y los medicamentos recetados fueron entregados por la misma EPS a la cual se encuentra afiliada. Adicionalmente se resalta que las presuntas facturas adosadas al proceso no cuentan con los requisitos establecidos para su valides, y no tiene fecha que indique cuándo se efectuó la posible adquisición de los medicamentos.



**(iii)** En el plenario no reposa prueba del supuesto gasto por alimentación que reclama la activa.

Así las cosas, en relación a la carga probatoria que recae en este caso en la parte Demandante, se puede observar que en el expediente no obra prueba alguna que acredite las erogaciones presuntamente realizadas con ocasión al accidente de tránsito acaecido el 31 de octubre del 2021. En efecto, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza de la activa es sin lugar a dudas la negación de la pretensión. En otras palabras, no puede presumirse el daño emergente alegado por la parte actora sin que su dicho sea sustentado mediante prueba o elemento de juicio suficiente para acreditar la cuantía de la pérdida que alega. Es claro que jurisprudencialmente se ha establecido que en tanto no se demuestre mediante prueba la causación del daño emergente, es jurídicamente improcedente considerar reconocer algún emolumento por este concepto. De modo que no le queda otro camino al Despacho que desestimar las pretensiones de la Demandante en lo relacionado con el daño emergente, puesto que no cumplió con la carga de probarlo.

En conclusión, una vez revisadas las pruebas obrantes en el plenario del proceso, no cabe duda que no existe ninguna que acredite la causación de daño emergente. Razón suficiente para que no se le reconozca ninguna suma indemnizatoria por esta tipología de perjuicios, en tanto que no se encuentra probada. Máxime, cuando la H. Corte Suprema de Justicia fue totalmente clara en indicar que éstos no se presumen, sino que se deben probar. Razón suficiente para solicitar al Despacho que desestime la pretensión invocada por la Demandante en lo relacionado con el daño emergente.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

1. IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE DAÑO A LA SALUD O PERJUICIO FISIOLÓGICO

En primera medida, debe precisarse el hecho de que el daño a la salud o perjuicio fisiológico y estético no se reconocen en la jurisdicción civil. Es decir, son tipologías del Daño que actualmente no son reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, pues los daños inmateriales se dan en tres aspectos de forma restrictiva, tal como se refiere la Corte Suprema de Justicia:

*“(…) De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional (…)”[[25]](#footnote-25)*

En cuanto a lo denominado por la parte demandante como perjuicio estético, es de recibo mencionar que el mismo no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Pues como bien ya se ha desarrollado, la Jurisdicción Civil ha estipulado de manera restrictiva los daños extrapatrimoniales que se reconocen, los cuales son daño moral, daño a la vida de relación y vulneración a derechos constitucionalmente protegidos. Así pues, que el reconocimiento de un daño adicional a los reconocidos por la Corte, constituiría a todas luces un enriquecimiento injusto a favor de la parte Demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que en el evento en el que se considere que los perjuicios solicitados corresponden al daño a la vida en relación de cualquier manera deberá tenerse en cuenta que la tasación propuesta por la parte Demandante es absolutamente exorbitante en tanto supera los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia:

*“(…)Así las cosas, quedó probada la merma de la capacidad de locomoción permanente de la demandante Cecilia Hernández Vanegas, producto del accidente de tránsito de que fue víctima, de un lado, con los conceptos técnicos expedidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y acogidos por el Tribunal Superior de Ibagué; de otro, con la calificación médica practicada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, que dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 44.90%, cuya estructuración correspondió al 8 de enero de 2008, fecha del suceso automovilístico anotado, probanza que fue allegada tras decreto oficioso de la Corte y ninguno de los intervinientes censuró (folios 124 a 131, precedentes).*

*(….)*

*Por lo tanto resulta acorde justipreciar el daño a la vida de relación padecido por tal demandante en cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) por cuanto, ha sentado la doctrina de esta Corte, dada su estirpe extrapatrimonial es propia del prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento. (…)”[[26]](#footnote-26)(Subrayado y negrita fuera del texto original)*

Es por ello que se evidencia una desmesurada solicitud perjuicios por concepto de daño a la vida en relación por el valor pretendido por la Demandante. En efecto, es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación del daño a la vida en relación, en tanto el mismo resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños a la vida de relación que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia ya relacionada. Así las cosas, teniendo en cuenta que el precedente jurisprudencial reseñado contempló como indemnización la suma de 50 SMMLV para el caso de una PCL de 44%. Ahora bien, para la situación fáctica que hoy nos convoca, no se aportó un dictamen con una calificación de pérdida de capacidad laboral por lo que, no sería procedente reconocer $46.400.000 por este concepto.

En conclusión, como primera medida se advierte que el daño en la salud o perjuicio fisiológico no son tipologías del daño actualmente reconocidas por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por ende, no hay lugar al reconocimiento de esta pretensión. En segundo lugar, si el honorable Juzgado entendiera la petición del Demandante como un daño a la vida en relación, de todas formas es de advertir que la tasación presentada por la Demandante es excesiva y deberá atenerse fielmente a los baremos establecidos por la Jurisprudencia de la Corte Suprema De Justicia.

En virtud de todo lo anterior, de manera respetuosa solicito que se declare probada esta excepción.

**EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. DEBIDO A QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ART. 1077 del C. Co.

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no ha surgido en cabeza de mi representada dado que no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil contractual del asegurado debido a que no han demostrado la ocurrencia del siniestro, pues las lesiones de la demandante Valentina Salgado Gallo se causó por la impericia en la conducción de la motocicleta, en la cual se movilizaba como pasajera, lo cual se corrobora no solo con el no porte de los documentos esenciales del vehículo, , sino por cuanto el IPAT, consigna la hipótesis 138, en cabeza del conductor de la motocicleta de placa HBL 47 A. Aunado a ello, no se ha probado la cuantía de la pérdida, en la medida que las peticiones de lucro cesante son antitécnicas puesto que no se ha probado la actividad económica, y el presunto ingreso económico percibidos por la demandante señora Cristina Gallo. Por tal razón no se ha cumplido con lo exigido en el artículo 1077 del Código de Comercio originando así la improcedencia de la afectación de la póliza No. 1507121012570.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto está suficientemente claro que el riesgo asegurado en la póliza es la responsabilidad en la que incurra el asegurado proveniente un accidente de tránsito y como quiera que en este caso no obra prueba que demuestre que el accidente ocurrido el 31 de mayo de 2021 se ocasionó como consecuencia de las conductas del conductor del vehículo de placas JIN-361, por lo que, es evidente que no se ha realizado el riesgo asegurado y en consecuencia no surge la obligación condicional del asegurador.

Así pues, teniendo en cuenta que el señor Juan Pablo Aramburo no tuvo ninguna injerencia con las lesiones padecidas por Valentina Salgado Gallo, en razón a que, la conducta del conductor de la motocicleta fue el único factor relevante y adecuado que incidió en el accidente de tránsito ocurrido el día 31 de mayo de 2021, por cuanto fue a causa de su impericia en la conducción de la motocicleta, que se genera la colisión con el vehículo de placas JIN-361, por cuanto en este caso medió un hecho de la víctima que rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora. Razón por la cual, no existe obligación de indemnizar por parte de la Compañía de Seguros.

Para efectos de las solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció́:

*“(…)* ***ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.***

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (…)*” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., Art. 1080) (…)”*[[27]](#footnote-27) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

1. **La no realización del Riesgo Asegurado.**

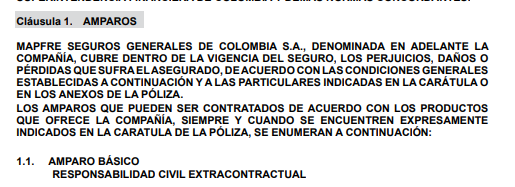
De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. 1507121012570.podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó, siendo necesario indicar que el objeto de la póliza es *indemnizar o reembolsar al asegurado las sumas por las cuales sea civilmente responsable.* Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró comoquiera que (i) no se encuentra acreditado el vínculo contractual por concepto de la conducción del vehículo de placas VPA- 676 y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual , (ii) no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecer de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, por un lado, el IPAT únicamente consagra una hipótesis sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos que suscitaron la presente litis y, por el otro, tampoco ha culminado la investigación penal adelantada con ocasión a los acontecimientos del 15 de julio de 2016, por lo tanto no se encuentra probado la existencia de un hecho dañoso y (ii) en el acervo probatorio no se observa medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado o conductor autorizado del vehículo de placasVPA-676. Sin embargo, la parte demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Por lo visto, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil contractual, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no se configuraron los presupuestos axiales para la declaratoria de la responsabilidad que se pretende endilgar a la pasiva, afirmación que encuentra sustento en la ausencia de medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles que, por un lado, expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente del 15 de julio de 2016 y, por el otro, acrediten que efectivamente existió un vínculo contractual Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

Sin perjuicio de las excepciones anteriores, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507121012570, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Se aclara que, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza Berta Hernández Hidalgo, o el conductor designado cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza.

En efecto, en la póliza de responsabilidad civil contractual No. 1507121012570, se pactó lo siguiente:



De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la *“Responsabilidad Civil Extracontractual”* en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la póliza de automóviles No. 1507121012570, entrará a responder, si y sólo si el asegurado o el conductor autorizado, es declarado civilmente responsable por un hecho constitutivo de responsabilidad civil contractual, acreditada mediante los medios idóneos. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil constituirá el *“siniestro”,* esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del Co. Co.).

Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 31 de octubre del 2021, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no tuvo ninguna injerencia las conductas del conductor del automóvil asegurado en la ocurrencia del accidente, ni se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad del conductor del mismo vehículo. Como consecuencia, no hay obligación condicional por parte de la Aseguradora.

1. **Acreditación de la cuantía de la pérdida.**

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos. Sobre los primeros, se ha de mencionar que la parte demandante no allegó al plenario documentación que acredite el efectivo pago de los emolumentos pretendidos por concepto de daño emergente, así como tampoco milita en el plenario documentos que permitan colegir que la señora Cristina Gallo devengaba ingresos previos al accidente que suscitó el presente litigio. Y, en relación con los daños extrapatrimoniales, la parte actora pretende el daño moral, daño a la vida de relación y daño a la salud tras el supuesto accidente de tránsito acontecido el 31 de octubre de 2021, lo anterior sin aportar medios probatorios que permitan colegir la existencia y cuantía de la tipología de perjuicios solicitados.

Concretamente debe analizarse que ninguno de los perjuicios pretendidos por el extremo actor tiene vocación de prosperidad pues carecen del carácter cierto del daño, veamos:

* **Frente al daño emergente:** Es preciso indicar que **(i)** dentro del plenario probatorio no obre prueba alguna respecto de los presuntos gastos por transporte pagados por la demandante, toda vez que la misma no acredita el valor pretendido, pues se observa únicamente unas cuentas de cobro que no cuentan con los requisitos establecidos para que los mismo sean establecidos como una factura o cuenta de cobro, conforme a los lineamientos del código de comercio. **(ii)** no está probado la compra de los medicamentos pues como se observa en la historia clínica aportada en la demanda, la joven Valentina Salgado pertenece al sistema subsidiado y los medicamentos recetados fueron entregados por la misma EPS a la cual se encuentra afiliada. Adicionalmente se resalta que las presuntas facturas adosadas al proceso no cuentan con los requisitos establecidos para su valides, y no tiene fecha que indique cuándo se efectuó la posible adquisición de los medicamentos y **(iii)** en el plenario no reposa prueba del supuesto gasto por alimentación que reclama la activa.
* **Frente al lucro cesante:** El rubro pretendido no tiene vocación de prospetida puesto queno obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Cristina Gallo efectivamente tuviera algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio, pues en el sistema RUAF Colombiano no se logra evidenciar información respecto a vinculación al sistema de seguridad social, y únicamente se evidencia que pertenece al régimen en salud subsidiado, lo que da cuenta que no cuenta que no cuenta con una vinculación laboral, que genere algún tipo de ingreso económico.
* **Frente a los perjuicios morales:** No obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
* **Frente al daño a la salud:** Es pertinente resaltar que no existe reconocimiento por este tipo de perjuicios, atendiendo que se entienden los mismo tazados y valorados dentro del daño a la vida en relación o derechos constitucionales, lo cual embarga un solo concepto de conformidad a los pronunciamientos realizados por la Corte Suprema, y busca que no se genere una doble indemnización, sin que se distorsione el modelo de reparación integral.
* **Frente al daño a la vida de relación:** El rubro pretendido no tiene vocación de prosperidad debido a que no se encuentra acreditada la afectación a la cotidianidad de las demandantes con ocasión al accidente de tránsito acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la póliza no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, ni la cuantía de la pérdida, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al extremo pasivo, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. Además, no se probó la cuantía de la pérdida puesto que la parte demandante se limitó a indicar los supuestos perjuicios sufridos sin allegar pruebas útiles, pertinentes y conducentes para acreditar la existencia y cuantía de los mismos. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. 1507121012570, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro No. 1507121012570, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro No. 1507121012570, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. 1507121012570, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia[[28]](#footnote-28) ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte[[29]](#footnote-29) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

1. EN TODO CASO NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. 1507121012570 **EMITIDA POR LA MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. 1507121012570, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, se pactó el valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual de $3.000.000.000, razón por la cual ante una eventual condena mi representada no estará obligada a pagar suma superior al límite referido.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

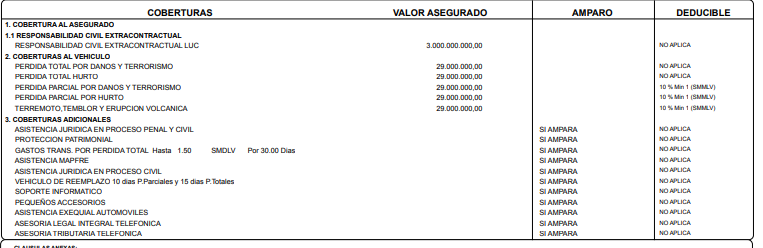
“*(…)* ***ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.*** *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)*”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“*(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)*”[[30]](#footnote-30).

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No.1507121012570 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. 1507121012570 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:



Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 02 de julio de 2021 hasta el 01 de julio de 2022.

De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

1. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1507121012570 EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que la parte actora pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(…)* ***Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio.*** *La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (…)”[[31]](#footnote-31)* (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

* $2.1110.000 por concepto de daño emergente, el cual es improcedente pues nose allega documentación que pruebe los gastos y/o erogaciones asumidas por los demandantes a raíz del accidente ocasionado el 31 de octubre de 2021 puesto que los documentos adosados por la parte actora no cumplen con los requisitos previstos en la legislación comercial para dar valor de cuenta de cobro.
* $11.716.941 por concepto de lucro cesante, el cual es improcedente pues no se encuentra acreditado que el señor Cristina María Gallo devengaba suma alguna por concepto de salario con anterioridad a los hechos acontecidos el 15 de julio de 2016, así como tampoco se encuentra acreditado el cese laboral de la señora Gallo.
* $92.800.000 por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
* $185.600.000 por concepto de daño a la vida de relación, lo cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre la afectación de las demandantes en su cotidianidad con ocasión al hecho acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
* $46.400.000 por concepto de daño a la salud, lo cuales son improcedentes toda vez que no es una tipología de daño reconocida en la jurisdicción ordinaria.

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de la demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño a la vida de relación, daño a la salud, daño moral, daño emergente y lucro cesante, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

1. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

1. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

## CAPÍTULO II

## CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR JUAN PABLO ARAMBURO HERNÁNDEZ Y BERMA IRMA HERNÁNDEZ HIDALGO

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

**Frente al hecho “PRIMERO”:** Es cierto que mi prohijada suscribió la Pólizade Seguros de Automóviles No. 1507121012570, la cual amara la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción del vehículo de placas JIN 361. Pese a lo anterior, se debe indicar que la mera existencia del contrato de seguro, no se traduce en la generación automática de una obligación a cargo de mi representada.

Corolario a lo previamente destacado, es menester resaltar que, el surgimiento de cualquier obligación en el asunto se encuentra condicionada a que se pruebe: (i) la estructuración de la responsabilidad civil que se pretende atribuir en cabeza de la parte demandada; (ii) que los hechos hubieren ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, y; (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.

**Frente al hecho “SEGUNDO”:** Lo expresado por el vocero judicial de la llamante no es un hecho sino, por el contrario, es una afirmación subjetiva. No obstante,se indica que la obligación indemnizatoria de mi represetadanace a la vida jurídica una vez se pruebe: (i) la estructuración de la responsabilidad civil que se pretende atribuir en cabeza de la parte demandada; (ii) que los hechos hubieren ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, y; (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**Frente a la pretensión “PRIMERA”: NO ME OPONGO** al llamamiento en garantía comoquiera que es la conducta procesal que le asiste al asegurado a luces del artículo 64 del Código General del Proceso.

**Frente a la pretensión “SEGUNDA”:** **ME OPONGO** a cualquier condena que se pretenda imponer a mi representada en virtud del contrato de seguro, en la medida en que no se ha acreditado la realización del riesgo asegurado, como lo es la responsabilidad civil contractual o extracontractual del conductor del vehículo de placas JIN 361, por ende, mientras no se acredite la condición de la que pende la obligación indemnizatoria de mi representada no es procedente que se le imponga condena alguna.

## EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INMDENIZAR DEBIDO A QUE NO SE HA ACREDITADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA No. 150712101257**

Se propone el presente medio exceptivo a fin de demostrarle al Despacho que en cabeza de mi representada no ha surgido obligación indemnizatoria alguna derivada de los hechos acontecidos el 31 de octubre de 2021 debido a que no se ha materializado el riesgo, esto es, no ha endilgado responsabilidad civil extracontractual por la conducción del vehículo de placas JIN 361, evento que no corresponde a la situación fáctica toda vez que en el caso de marras se configuraron las causales eximente denominada “caso fortuito” y “hecho de un tercero” y, en ese sentido, no se realizó el riesgo amparado en el contrato de seguro contenido en la Póliza No. 150712101257.

La determinación del siniestro, tal como versa en el artículo 1072 del Código de Comercio donde se conceptualiza el siniestro como la realización del riesgo asegurado, y el riesgo asegurado como se desarrollará, es definido por el artículo 1054 del mismo estatuto como el suceso incierto que no depende de la voluntad del tomador, ni del asegurado y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Es decir, el siniestro como hecho que detona la exigibilidad de la obligación indemnizatoria de una aseguradora, es la realización del riesgo asegurado el cual produce daños o perjuicios y cuya reparación estaría garantizada por el contrato de seguro.

En otras palabras, aunque haya pérdida para el asegurado o el beneficiario, no se considerará siniestro a menos que dicho hecho ocurra tal y como se previó en la misma póliza que instrumenta al seguro, o cuando habiendo ocurrido, en su producción convergen circunstancias que se previeron como exclusiones. Dicho lo anterior, se tiene que no existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza de Responsabilidad Civil contractual, por cuanto en el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar, en tanto se puede concluir que el hecho dañoso devino del actuar de un tercero y también medió una fuera mayor o caso fortuito. En este sentido, se encuentra probado que **(i)** el IPAT adosado el presente asunto, consigna la causal 138 atribuida al vehículo de placa HLB-474 en el cual se movilizaba la hoy demandante, Valentina Salgado; **(ii)** adicionalmente, el mismo informe policial de accidente de tránsito, estableció las hipótesis 302, 304 y 308, relacionadas a *“ausencia o deficiencia en demarcación”, “superficie húmeda”* y *“lluvia”,* respectivamente, y atribuidas a las condiciones viales, lugar donde sucedió el presunto accidente de tránsito; **(iii)** el croquis del IPAT no es claro y preciso en exponer cual era el sentido vial en el que se movilizaban los vehículos involucrados en el supuesto accidente, como quiera que el mismo señala lo siguiente *“posible trayectoria vial”*, y junto con la posición de los vehículo, es claro que hubo inferencia en las condiciones viales y climáticas que afectan el buen desempeño de la conducción. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que la parte demandante sea responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por la demandante.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1072 del Código de Comercio, estableció:

*“(…) ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado (…)”*

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo- como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…)* ***Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual, si fuera poco, emerge pura y simple****.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida****. (…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero, aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”6 (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Sin perjuicio de las excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la póliza No. 150712101257, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que los riesgos asegurados respectivamente no se realizaron. Se aclara que, mediante los referidos contratos de seguro, en virtud de los cuales se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de las pólizas cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 31 de octubre del 2021, la causa por la cual ocurrieron los hechos de la mentada fecha se debe a conducta de un tercero y a circunstancias que escapan de la órbita de actuación del conductor del vehículo asegurado, por ende, un eximente de responsabilidad. Por lo anterior, como lo ha establecido y decantado la Corte Suprema de Justicia, dentro del caso de marras se observa plenamente la configuración de una causa extraña por el hecho de un tercero y caso fortuito lo que, consecuentemente, implica la materialización de un eximente de responsabilidad en favor de la pasiva y finamente, le negación de la totalidad de las pretensiones y la absolución del extremo demandado de la Litis.

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el libelo de demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que el accidente acaecido el día 31 de octubre de 2021 devino exclusivamente del actuar de un tercero y un caso fortuito, eventos que no pudieron ser evitados por la parte pasiva de la litis. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la póliza No. 150712101257, que sirvió como sustento para vincular a mi representada, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora.

Solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

1. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. 1507121012570, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro No. 1507121012570, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro No. 1507121012570, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. 1507121012570, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia[[32]](#footnote-32) ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte[[33]](#footnote-33) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

1. EN TODO CASO NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. 1507121012570 **EMITIDA POR LA MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. 1507121012570, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, se pactó el valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual de $3.000.000.000, razón por la cual ante una eventual condena mi representada no estará obligada a pagar suma superior al límite referido.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

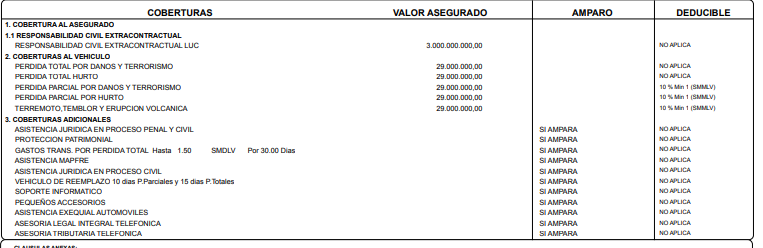
“*(…)* ***ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.*** *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)*”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“*(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)*”[[34]](#footnote-34).

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 1507121012570 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. 1507121012570 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:



Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 02 de julio de 2021 hasta el 01 de julio de 2022.

De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

1. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1507121012570 EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que la parte actora pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(…)* ***Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio.*** *La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (…)”[[35]](#footnote-35)* (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

* $2.1110.000 por concepto de daño emergente, el cual es improcedente pues nose allega documentación que pruebe los gastos y/o erogaciones asumidas por los demandantes a raíz del accidente ocasionado el 31 de octubre de 2021 puesto que los documentos adosados por la parte actora no cumplen con los requisitos previstos en la legislación comercial para dar valor de cuenta de cobro.
* $11.716.941 por concepto de lucro cesante, el cual es improcedente pues no se encuentra acreditado que el señor Cristina María Gallo devengaba suma alguna por concepto de salario con anterioridad a los hechos acontecidos el 15 de julio de 2016, así como tampoco se encuentra acreditado el cese laboral de la señora Gallo.
* $92.800.000 por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
* $185.600.000 por concepto de daño a la vida de relación, lo cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre la afectación de las demandantes en su cotidianidad con ocasión al hecho acontecido el 31 de octubre de 2021 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
* $46.400.000 por concepto de daño a la salud, lo cuales son improcedentes toda vez que no es una tipología de daño reconocida en la jurisdicción ordinaria.

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de la demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño a la vida de relación, daño a la salud, daño moral, daño emergente y lucro cesante, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

1. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

1. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

1. **Ratificación de documentos provenientes de terceros**

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: *“(…) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”.*

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

1. Registro fotográfico de las lesiones.
2. Copia de facturas de gastos por transporte.
3. Copia de facturas de gastos por medicamentos.
4. Carta laboral de la señora Cristina María Gallo.

## MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

## DOCUMENTALES

* Copia del Póliza de Seguros de Automóviles No. 1507121012570
* Clausulado general No. 15032013-1326-P03-0000VTE04/MAR13 aplicable a la póliza No. 1507121012570.

## INTERROGATORIO DE PARTE

1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la demandante VALENTINA SALGADO GALLO y CRISTINA MARÍA GALLO PARRA, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor JUAN PABLO ARAMBURO HERNÁNDEZ en su calidad de conductor del vehículo de placas JIN 361, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.
3. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora BERTA HERNÁNDEZ HIDALGO en su calidad de propietaria del vehículo de placas JIN 361, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.

## DECLARACIÓN DE PARTE.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro Póliza Seguro vinculada.

## TESTIMONIALES.

* 1. Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán y puede ser citada en la Carrera 32 bis No. 4 16 Popayán y correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza de Seguros de Automóviles No. 1507121012570, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.
  2. Adicionalmente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **BRAYAN BARANDICA CUAICUAN**, en su calidad de conductor del vehículo HLB-47 A en que se movilizaba la hoy demandante, quien podrá ser notificado en la siguiente dirección Vereda el Rosario Santa Elena, municipio del Cerrito o al celular 3008835011; a fin de que conteste lo que sabe y le consta de los hechos ocurridos el día 31 de octubre del 2021 donde resultó lesionada Valentina Salgado.
  3. Adicionalmente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **YURI HINCAPIE**, en su calidad de agente de tránsito, y quien realizo el IPAT del accidente de tránsito@ginebra-valle.gov.co o al celular 3213229633 a fin de que conteste lo que sabe y le consta de los hechos ocurridos el día 31 de octubre del 2021 donde resultó lesionada Valentina Salgado.
  4. Adicionalmente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **DUVAN ALBERTO DÍAZ**, en su calidad de conductor del vehículo KAS-13D, el cual se vio involucrado en los hechos del 31 de octubre de 2021, y quien podrá ser notificado en la siguiente dirección electrónica: duvandiaz292@gmail.com o al celular 3135711617; a fin de que conteste lo que sabe y le consta de los hechos ocurridos el día 31 de octubre del 2021 donde resultó lesionada Valentina Salgado.
  5. Adicionalmente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **ESTEBAN SOLANO PINO,** en su calidad de conductor del vehículo TFJ-67F, el cual se vio involucrado en los hechos del 31 de octubre de 2021, y quien podrá ser notificado en la siguiente dirección electrónica: baironsolano99@gmail.com o al celular 3234078852; a fin de que conteste lo que sabe y le consta de los hechos ocurridos el día 31 de octubre del 2021 donde resultó lesionada Valentina Salgado.

## DICTAMEN PERICIAL.

Comedidamente anuncio que me valdré de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 31 de octubre de 2021.

Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

## INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

## ANEXOS

* Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
* Poder general conferido al suscrito para actuar en nombre de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
* Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
* Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

## NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

A mí representada en la Carrera 14 #96-34 de la ciudad de Bogotá. Dirección electrónica: [njudiciales@mapfre.com.co](mailto:njudiciales@mapfre.com.co)

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona) [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicación número 11001-31-03-032-2011-00736-01, de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema De Justicia, Sentencia SP1796-2018/51390 de mayo 23 de 2018. M.P. Dr. Ángel Guillermo Salazar Otero [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Jusricia SC, 26 nov. 1999, rad. n° 5220,. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418 [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-

   188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-6)
7. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002- 188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. Expediente No. 11001-3103-003-1995-07113-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. [↑](#footnote-ref-9)
10. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente. 16530. MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-10)
11. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-11)
12. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Actuaciones por daños. Ed. Hammurabi, BA. Pág. 172. Del artículo de PATIÑO. Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. Expediente No. 11001-3103-003-1995-07113-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. [↑](#footnote-ref-13)
14. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente. 16530. MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-14)
15. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-15)
16. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Actuaciones por daños. Ed. Hammurabi, BA. Pág. 172. Del artículo de PATIÑO. Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418. [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-18)
19. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque. [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sentencia de casación civil del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona) [↑](#footnote-ref-22)
23. Ídem [↑](#footnote-ref-23)
24. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-24)
25. Corte Suprema de Justicia, SC10297-2014. Radicación: 11001-31-03-003-2003-00660-01. [↑](#footnote-ref-25)
26. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Radicado 2009-00114. Sentencia del 12 de noviembre de 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibídem. [↑](#footnote-ref-29)
30. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-30)
31. Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibídem. [↑](#footnote-ref-33)
34. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-34)
35. Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-35)